
México: el legado virreinal

José Antonio Crespo Mendoza*



En uno de sus múltiples comunicados, el subcomandante Marcos invitó a la sociedad mexicana a quitarse la máscara para verse tal como es, pero sobre la advertencia de que "al quitarse su propia máscara, la sociedad civil mexicana se dará cuenta, con un impacto mayor, que la imagen que le habían vendido de sí misma es falsa, y la realidad es bastante más aterradora de lo que suponía".¹ Lo que está detrás de la máscara social mexicana son poderosos y vigentes vestigios del orden virreinal, cuyos rasgos básicos fueron el patrimonialismo, el autoritarismo político, el clasismo, el racismo, el monopolismo y una enorme desigualdad.

Numerosos académicos de diversas disciplinas han sugerido desde hace años que el régimen virreinal, en su esencia, jamás fue desmantelado por los diversos movimientos que lo han pretendido; el de los insurgentes de 1810, los liberales de 1858, o los revolucionarios de 1910. Curiosamente, todos estos esfuerzos democráticos triunfaron formalmente sobre sus antagonistas, defensores estos últimos de un régimen vertical, autoritario y expoliador del cual eran beneficiarios. Y sin embargo, los rasgos esenciales del virreinato sobrevivieron durante los primeros años de nuestro país, en el porfiriato y también en el actual régimen posrevolucionario.

A grandes rasgos podría describirse al régimen virreinal, que dominó en estas tierras a lo largo de trescientos años, como fundamentalmente centralizado, autoritario y patrimonialista, es decir, en donde los recursos son considerados como propiedad privada del monarca, el cual podía, según su voluntad, distribuir y concesionar tales recursos. También el orden novohispano era altamente clasista y racista,

rígidamente jerárquico y económicamente monopolístico. Esto puede visualizarse como una pirámide extractiva que recoge los recursos generados en la base enviándolos hacia arriba, para beneficio y provecho de los reducidos grupos situados en la cúspide de la pirámide. Por supuesto, tal ordenamiento se tradujo muy pronto en una sociedad sumamente injusta y con una fuerte concentración del ingreso en un puñado de personas y sus descendientes. Se trataba pues de un régimen altamente expoliativo.

Pero la legitimación de dicho orden respondía a valores y consideraciones muy lejanas del entender moderno; no era sino el resultado del derecho de conquista de los españoles que, como la antigua nobleza europea, había adquirido con la espada el privilegio de usufructuar estas tierras y disponer de sus recursos y habitantes. Esa era la legitimación vigente en la época, no sólo en España, sino prácticamente en todo el mundo. Lo que hoy veríamos como corrupción, no lo era en aquella época. Así, nos dice Gabriel Zaid:

El soberano dueño de vidas y hacienda no tiene conflictos de interés, no pretende representar el interés de los demás, ni mucho menos ser su servidor [...]. El tesoro real no es dinero público: es propiedad privada de la familia real. Los impuestos entran a la caja real, y no se trata de un robo. Vender cargos, empleos, títulos de nobleza, concesiones de explotación, es negocio del soberano que recibe legítimo dinero, no mordidas.²

Y con todo, los iberos sintieron necesidad de cubrir tan dura explotación con un manto menos severo: la evangelización. Pero lo que en verdad actuaba como fundamento de la explotación virreinal era el derecho de conquista ganado a sangre y fuego. Se puede decir que operaba una doble legitimación, una más aceptada por benigna, la evangelización, y otra, el derecho de conquista, sumamente funcional en la acción

* Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas; articulista del diario *Reforma*.

de la clase hispana y criolla, beneficiaria de la pirámide virreinal.

Tan injusto orden social, nos dice la historia oficial, fue derrotado y desmantelado a partir de la guerra de Independencia, cuando los mexicanos fueron gradualmente sustituyendo los principios ordenadores del Virreinato por sus opuestos: soberanía popular, igualdad social y racial, democracia política, equidad de oportunidades, descentralización económica, movilidad social sin trabas jerárquicas. En otras palabras, el programa político y social sustentado primero por los insurgentes, más tarde por los liberales y finalmente por los revolucionarios de este siglo. Programa enarbolado en los tres grandes movimientos épicos que constituyen la espina dorsal de la historia independiente: la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910. Muchos mexicanos creen esto a pie juntillas, y consideran el orden virreinal como algo completamente lejano y superado. Un pasado remoto que ya nos es ajeno.

Pero deteniéndose tan sólo un poco en la realidad actual, podríamos concluir que la sociedad guarda todavía varias similitudes esenciales con aquél lejano orden virreinal. En esencia, el régimen político, aunque democrático formalmente, sigue siendo centralizado y vertical, básicamente autoritario; los recursos de la nación no pertenecen legalmente al soberano (el presidente), pero la clase política actúa en los hechos como si así fuera; la estructura económica continúa siendo fundamentalmente oligopólica; la movilidad social sigue siendo un proceso obstaculizado y la estructura de clases es por demás rígida; el racismo está desterrado de nuestras leyes, pero no de las conciencias ni de buena parte del comportamiento social, individual e institucional; México sigue siendo uno de los países más injustos del mundo, en lo que hace a la distribución del ingreso. Es decir, todavía vivimos bajo una pirámide política, económica y social muy parecida a lo que representó el virreinato; pirámide más flexible, ciertamente, y menos represiva que la de entonces, pero una pirámide al fin, hartamente autoritaria y cuya cúspide se beneficia en grande de tal ordenamiento. Meteóricas fortunas se siguen cosechando, gracias a la funcionalidad de la nueva pirámide posrevolucionaria, de manera parecida a las riquezas derivadas de la dominación virreinal.

Para reconocer esto, generalmente se indispensable un periodo de reflexión y estudio profundos, por parte de los sectores acomodados. Guillermo Prieto, como portavoz de las clases bien de México, llegó a reconocer que "Nos hemos convertido en los gachupines de los indios".³ Ante ello, la pregunta obligada es, ¿por qué no es tan visible la analogía del

actual orden social con el del virreinato? Parte de la respuesta puede encontrarse en que también hoy en día operan dos tipos básicos de legitimación. Una, la formal, la aceptada públicamente, que ya no es la evangelización, pero es tan benigna como ella, la soberanía popular, de donde surgen valores como la justicia social y la democracia política.

Pero las élites política y económica del país continúan actuando bajo otra legitimidad internalizada, que no se dice públicamente pero que todos, o casi, acatan como operativa; se trata de la herencia del derecho de conquista de los españoles, que en realidad nunca fue destruido sino sólo transferido -o más bien arrebatado- de unas manos a otras, confiriendo a sus nuevos dueños el privilegio de seguir expoliando los recursos y el trabajo humano del país para amasar sus respectivas fortunas.

Esto implica que ni los insurgentes ni los liberales ni los revolucionarios lograron desmantelar de raíz el orden virreinal contra el que se levantaron en distintos momentos; y no lo lograron no tanto por incapacidad, sino por que, una vez en el poder, prefirieron mantener una estructura que resultaba sumamente redituable, desde la perspectiva del interés individual, por supuesto. Es como si, en cada una de las respectivas guerras, la de Independencia, la de Reforma y la Revolución, los vencedores hubieran arrebatado una carta donde constaba el derecho de conquista ancestral de los españoles, y en lugar de quemarla simplemente se apropiaron de ella para recibir sus beneficios. Por ello es que la esencia del orden virreinal prevaleció por sobre todos esos movimientos que lo desafiaron frontalmente. El triunfo simbólico de todas estas guerras históricas correspondió al pueblo de México; los frutos reales, a las élites que lo dirigían.

Por supuesto en cada momento el orden social heredero del virreinato sufrió cambios, algunos de fondo, pero la mayoría superficiales; modificaciones que permitieron mantener lo esencial del régimen virreinal en lo que constituye ya una maestría mexicana; el famoso arte gatopartidista de cambiar todo para que nada cambie. Desde luego, la élite beneficiaria de la pirámide se ha diversificado un poco más, tanto social como étnicamente, además de haberse ampliado. Ello merced al carácter popular de los movimientos que pretendían desmantelar la pirámide virreinal. Un cambio fundamental para preservar la fructífera pirámide consistió, por supuesto, en cambiar su legitimidad formal. En cada lucha se fue agregando un manto ideológico para cubrir el esqueleto verdadero del orden piramidal que subsistía: en la Independencia se forjó el nacionalismo como legitimación básica; después, durante la Reforma, la

legitimación añadida fue la democracia política, y por último, al triunfo de la Revolución de 1910, el nuevo manto legitimador fue la justicia social.

Así, la añeja estructura de la pirámide virreinal pudo ser disminuida con tres gruesos mantos ideológicos, uno superpuesto al otro, que ciertamente dificultan el percatarse que detrás de ellos prevalece la esencia de la ancestral pirámide expoliadora que fundaron los conquistadores españoles. Para verla es necesario hacer una crítica seria y profunda del carácter democrático, social y nacionalista del régimen actual. Ello requiere generalmente de estudios más o menos profundos sobre esas cuestiones, pero también estar desvinculado del propio régimen, cosa no muy agradable para muchos, pues grandes oportunidades de ascenso económico y social se pierden de esa forma. Pero la vinculación orgánica con el régimen, cuando se recibe -o se espera hacerlo en el futuro inmediato- algo sustancioso de él, obstruye también esa visión. En tal caso la idea de que el esqueleto de la pirámide virreinal sobrevive tras los abrigos ideológicos que históricamente se le han puesto, se percibe normalmente como absurda y desfasada por completo.

Pero no hace mucho pudimos observar un fenómeno sorprendente: quienes menos oportunidad tienen de estudiar y hacer susudos análisis y reflexiones sobre el carácter del régimen, o de su herencia histórica, lo perciben como la prolongación de la pirámide virreinal de manera directa y natural. Así, diversos campesinos y otros miembros de las clases más humildes de México expresaron su sentir a través de cartas durante la víspera de los conflictivos y desafiantes comicios de 1988, enviadas al entonces candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente más querido y respetado de este siglo. La conexión que estos campesinos hacen del virreinato con el porfiriato y el régimen actual es inequívoca.⁴

Por ejemplo, la visión que prevalece del partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional, no es nada favorable; se le concibe como el principal responsable de las dificultades del país, así como el mayor obstáculo para superarlas. Los que escriben suelen concebir al PRI como el partido de "los ricos capitalistas", de los "cachorros porfiristas disfrazados de revolucionarios". Pero la protesta no se limita al partido oficial y sus miembros: se extiende al régimen en su conjunto dada la estrecha relación entre partido y Estado que prevalece en México. Una comparación que a los priistas les resulta odiosa, pero que a los humildes no les cuesta trabajo hacer, es la del régimen priista con el porfiriato. En efecto, no son pocas las alusiones en este sentido. Unos campesinos de

Jalisco piden que se vuelvan a aplicar las leyes revolucionarias "porque ahorita en la época en que nos encontramos ya nos están rigiendo las leyes de un Porfirio Díaz".

Pero hay quienes hacen el parangón con épocas más lejanas; con la Colonia, por supuesto: "Nosotros los pobres -dicen en Morelos- he pensado que no tenemos ningún apoyo, sólo he entendido que hemos estado viviendo una vez más la época de los españoles corruptos también". Y un otomí describe la historia de su pueblo como "más de cinco siglos de colonialismo y explotación. Trabajando para el dominador. Los indígenas hemos sido relegados a niveles casi infrahumanos en esta sociedad".

Una idea que llama la atención, también recurrente, es que si la conquista no ha terminado, ello no se explica sólo por razones de clasismo, sino incluso de racismo. A sus ojos, son los criollos los que se siguen beneficiando del desarrollo del país en detrimento de indios y mestizos; "los verdaderos mexicanos". El mito de la igualdad étnica en nuestro país no ha arraigado en esos grupos. Por lo mismo, describen a "la mafia que hay en la presidencia de la república" como "puros españoles y descendientes muy cercanos de españoles; ¡desde cuándo vienen explotando al país y no se llenan de robarlo!", y otros agregan "¡Que desgracia!, nunca nos hemos podido quitar de encima, desde la conquista, de que nos sigan robando los gachupines" Esta conciencia de ser explotados a manos del México criollo ha hecho que indígenas y campesinos quieran ser gobernados por alguien como ellos; "ya no queremos que nos gobiernen extranjeros -escribían a Cárdenas- queremos que nos gobierne un indio mexicano".

Cinco años después de los comicios de 1988, pocos meses antes de las elecciones presidenciales de 1994, surge una sublevación guerrillera en el estado de Chiapas, que por su eficacia sorprende a la sociedad mexicana y a su gobierno. El llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional difundió un documento denominado "Declaración de la Selva Lacandona"; en él volvía a aparecer la premisa de que el añejo régimen virreinal no había sido desmantelado, y que todos los movimientos populares para hacerlo habían sido traicionados. De modo que el movimiento se planteó reanudar esa histórica lucha para desmantelar, de una vez por todas, la dominación virreinal que bajo distintos ropajes había sobrevivido por cinco siglos. En la Declaración se leía:

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo

norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, ni techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades [...].

Los neozapatistas identificaron su lucha con aquellas gestas históricas del pueblo mexicano, intentos fallidos para transformar de raíz el antiguo orden virreinal. Y a la élite priísta la conceptuaron como la heredera de conquistadores, conservadores y porfiristas interesados en seguir usufructuando el injusto orden que quedó en México como legado histórico del virreinato:

Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nación, los desposeídos somos millones hoy llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarlos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas. Son los mismos que se opusieron a la expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo.

Por su parte, el Consejo Estatal Indígena y Campesino (CEIC) respondió al EZLN:

Nos unen 500 años de exterminio y de martirio, pero también 500 años de resistencia, de sublevaciones y de utopías por sobrevivir como naciones, como pueblos libres y dignos.

De modo tal que una tarea pendiente que tiene nuestro país es la de dismantelar a fondo el viejo régimen piramidal que data de varios siglos y que ha podido sobrevivir, a la vista de todos, encubierto en ingeniosos disfraces y cediendo, desde luego, en aquello que no podía conservar, pero a cambio de mantener lo esencial de su estructura. Sin embargo, dada la enorme resistencia y capacidad de adaptación

que ha mostrado la truculenta pirámide explotativa, su dismantelación se antoja como una laboriosa y delicada tarea.

El detonador chiapaneco se ha constituido como un nuevo intento para transformar de fondo a la sociedad mexicana, y finalmente, dismantelar el legado virreinal del que no hemos podido -o más bien querido, si se trata de las clases acomodadas- deshacernos de él. El recurso a la violencia para dicho propósito puede resultar sumamente costoso a toda la nación. Los zapatistas han insistido en que no les quedó otro remedio. Algunos han entendido sus razones; otros las han comprendido sin justificar los medios utilizados por ellos, y otros más han insistido en que la violencia, incluso si es originada por motivos justos o legítimos, sólo puede provocar males y retrocesos. Por ello mismo se hace necesaria la transformación social, buscando, mientras haya tiempo, canales pacíficos para ello. ¿Con el aviso chiapaneco, es posible que podamos y queramos hacerlo sin necesidad de que la violencia vuelva a imponerse como un recurso que históricamente ha sido fallido para ese propósito? Y finalmente, como señaló Marcos "¿está la sociedad civil mexicana lista a quitarse su máscara?". Mientras las élites políticas y económicas no reconozcan el legado virreinal, los sectores afectados se los intentarán hacer ver como sea, incluso con la "voz de los fusiles", como dicen los zapatistas, la cual evidentemente no es la mejor forma. ▲

Notas

1. *La Jornada*, 25 de enero de 1994.
2. "La propiedad privada de las funciones públicas", en *La economía presidencial*, Vuelta, México, 1987.
3. Citado por Enrique Krauze en *Emiliano Zapata: el amor a la tierra*, FCE, México, 1987.
4. Adolfo Gilly (comp.). *Cartas a Cuauhtémoc Cárdenas*, Era, México, 1989.

